

**INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD  
CONTRATO 100/2024 DE SERVICIO DE PROCURADURÍA  
DE LOS TRIBUNALES**

**EXPEDIENTE N.º: 100/2024**

**Área: Ente Público Canal de Isabel II**  
**Fecha: 28 de febrero de 2025**

---

## 1. OBJETO DEL CONTRATO

### A. TIPO DE CONTRATO:

- ☐ CONTRATO DE OBRAS  
☐ CONTRATO DE SUMINISTROS  
☒ CONTRATO DE SERVICIOS

### B. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del Contrato es la prestación de los servicios de procuraduría de los tribunales (en adelante “los Servicios”) en representación de Ente Público Canal de Isabel II, Canal de Isabel II, S.A. M.P y las siguientes empresas participadas por ésta:

- ✓ Canal Extensia S.A.U.
- ✓ Canal Gestión Lanzarote S.A.U

Los Servicios consisten en asumir la representación procesal de las citadas empresas y Ente, ante cuantas instancias de cualquier jurisdicción y órganos se requiera, en el ámbito del lote del que haya sido adjudicatario, ejecutando las distintas actuaciones que se deriven de la referida representación procesal, entre los que cabe citar, a título meramente enunciativo y no limitativo, los siguientes: remisión de notificaciones y traslados de escritos y documentación de cualquiera de las partes intervinientes en un procedimiento, control de plazos y señalamientos, presentación de escritos y documentación, realización de las gestiones que le sean encomendadas, gestión y pago de Tasas y Depósitos Judiciales en caso de ser obligatorio, así como el resto de actuaciones propias de la procuraduría y conforme a lo dispuesto en el presente el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, “PPT”), quedando las partes sometidas expresamente a lo dispuesto en éstos.

Canal de Isabel II, S.A.M.P., las citadas empresas y Ente se reservan la facultad de acudir representada por persona distinta del adjudicatario en los casos que legalmente no sea preceptiva la intervención de un procurador.

### C. DIVISIÓN EN LOTES:

- ☐ NO  
☒ SÍ

#### GRUPO A:

#### PARTIDOS JUDICIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

**LOTE 1:** Un procurador para todos los partidos judiciales de la Comunidad de Madrid.

**LOTE 2:** Un procurador para todos los partidos judiciales de la Comunidad de Madrid.

**LOTE 3:** Un procurador para todos los partidos judiciales de la Comunidad de Madrid.

**LOTE 4:** Un procurador para todos los partidos judiciales de la Comunidad de Madrid.

**LOTE 5:** Un procurador para todos los partidos judiciales de la Comunidad de Madrid.

No obstante y con carácter extraordinario, los adjudicatarios de los **Lotes 1, 2, 3, 4 y 5 del GRUPO A** vendrán obligados a personarse en un procedimiento judicial fuera del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, a excepción de Cáceres, Arrecife y Las Palmas de Gran Canarias, en el supuesto de que una vez iniciado un procedimiento en la Comunidad de Madrid, el Juzgado conocedor del asunto declarase su falta de competencia territorial como consecuencia del cambio de domicilio del demandado, y en cuyo caso, la representación procesal se extenderá igualmente al nuevo partido judicial que corresponda y hasta la completa resolución del asunto encomendado. Ello sin perjuicio de la posibilidad de que, en caso de requerir actuaciones presenciales, pueda ser sustituido, a su elección, responsabilidad y a su costa, por un procurador que trabaje en el partido judicial correspondiente, sin que ello pueda repercutir en el precio del servicio prestado.

**GRUPO B:**  
**PARTIDO JUCIAL DE CÁCERES**

**LOTE 6:** Un Procurador para el partido judicial de Cáceres y, en su caso, los partidos judiciales donde se ubiquen los tribunales de instancias superiores en las que pudiera recaer el asunto hasta su finalización (Audiencia Provincial, Tribunal Superior de Justicia)

**LOTE 7:** Un Procurador para el partido judicial de Cáceres y, en su caso, los partidos judiciales donde se ubiquen los tribunales de instancias superiores en las que pudiera recaer el asunto hasta su finalización (Audiencia Provincial, Tribunal Superior de Justicia)

**GRUPO C:**  
**PARTIDOS JUDICIALES DE ARRECIFE Y LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS**

**LOTE 8:** Un Procurador para los partidos judiciales de Arrecife y de Las Palmas de Gran Canarias.

**LOTE 9:** Un Procurador para los partidos judiciales de Arrecife y de Las Palmas de Gran Canarias.

## **2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN**

El plazo de duración del contrato será de 5 años desde la firma del Acta inicio prestación de los servicios que será suscrita una vez firmado el contrato y en el momento en el que se requiera la primera prestación de los servicios de un procurador (por no poder ser cubierto el servicio bajo otro contrato de servicio procuraduría vigente).

Si bien transcurrido el plazo de vigencia del contrato no se le podrán encomendar a los adjudicatarios la representación procesal de ningún asunto, los adjudicatarios están obligados a continuar la representación en los asuntos no finalizados hasta la terminación completa atendiendo a la naturaleza de la

prestación objeto del contrato (incluidas instancias superiores, ejecuciones...) dentro del ámbito descrito en su lote.

### 3. MEMORIA ECONÓMICA

#### A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

	BASE	IVA	TOTAL
PBL	50.025,00 €	10.505,25€	60.530,25€

#### B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación de este contrato es para satisfacer las necesidades del Ente Público Canal de Isabel II en materia de servicios de procuraduría de los tribunales.

EMPRESA DEL GRUPO	Importe
Ente Público Canal de Isabel II	50.025,00
<b>TOTAL (Presupuesto Base de Licitación s/ IVA)</b>	<b>50.025,00</b>

#### C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
K11000	623000	G/623000/000002	62005044

Inversión:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	Elem. PEP

Línea Estratégica:

*	Descripción Línea Estratégica	*	Descripción Línea Estratégica
<input type="checkbox"/>	LE01: Asegurar garantía de Suministro	<input type="checkbox"/>	LE07: Transparencia, buen gobierno y compromiso
<input type="checkbox"/>	LE02: Garantizar calidad agua de consumo	<input type="checkbox"/>	LE08: Talento, compromiso y salud profesionales
<input type="checkbox"/>	LE03: Fortalecer continuidad de servicio	<input type="checkbox"/>	LE09: Liderar innovación y desarrollo
<input type="checkbox"/>	LE04: Calidad ambiental y eficiencia energética.	<input type="checkbox"/>	LE10: Sostenibilidad y eficiencia en la gestión
<input type="checkbox"/>	LE05: Cooperación con municipios de Madrid	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A: No Aplica
<input type="checkbox"/>	LE06: Compromiso y cercanía con usuario		

## D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

AÑO	GASTO	INVERSIÓN	TOTAL (s/IVA)
2025	10.005,00€	0	10.005,00 €
2026	10.005,00€	0	10.005,00 €
2027	10.005,00€	0	10.005,00 €
2028	10.005,00€	0	10.005,00 €
2029	10.005,00€	0	10.005,00 €
<b>TOTAL (S/ IVA)</b>	<b>10.005,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>10.005,00 €</b>

## E. ¿ESTE CONTRATO ES SUSTITUCIÓN DE UNO YA EXISTENTE?

- ☒ **SI** Los datos comparativos figuran en el anexo a este documento.  
☐ **NO**

**SI HA RESPONDIDO SÍ, INDICAR CUÁL/CUÁLES SON LOS CONTRATOS RENOVADOS:** Contrato de servicios de procuraduría de los tribunales Nº: 108/2019 que fue tramitado por Canal de Isabel II, S.A., M.P.

## F. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA PLANIFICACIÓN PLURIANUAL VIGENTE?

- ☒ **SI** Código asignado:

**CÓDIGO DEFINITIVO PCCYII-24:** PCCYII 24 – 334  
**Código PPCYII 23-25:** PCCYII 23 - 423

- ☐ **NO**

## 4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

## A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

## A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:

Canal de Isabel II, S.A.M.P, el Ente y el resto de las empresas incluidas en el presente contrato tienen la necesidad de personarse en procedimientos judiciales para la defensa de sus legítimos intereses.

Para ello, conforme lo previsto en la legislación procesal (artículo 23 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; artículo 784 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1982 aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa...), dicha personación, como regla general, ha de efectuarse obligatoriamente a través de la representación procesal de un Procurador de los Tribunales -que incluye todos los servicios del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España aprobado por Real Decreto 1281/2002 así como el resto de normativa procesal, así como de sus respectivos colegios profesionales que le son de aplicación-, por lo que su contratación resulta imperativa.

## A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

El contrato de servicios de procuraduría de los tribunales se concibe como un servicio de carácter recurrente porque cubre una necesidad de carácter permanente, toda vez que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, caracteriza a los procuradores como sujetos cooperantes con la Administración de Justicia, atribuyéndoles con exclusividad la representación de las partes en todo tipo de procesos.

De esta manera, la propuesta de contrato planteado se muestra como idónea para cubrir las necesidades expuesta toda vez que:

- ✓ La **duración de 5 años** permite que el procurador que inicia la tramitación judicial de un asunto, que se alarga durante años, lo concluya teniendo total conocimiento y control de éste. Así, a su finalización, está asegurada toda la información y documentación necesaria para su liquidación económica además de otras ventajas como la facilitación durante todo el asunto del control de presupuesto, facturación y del resultado de ejecución de los servicios.
- ✓ La distribución para el Contrato núm. 100/2024 relativo al “SERVICIO DE PROCURADURÍA DE LOS TRIBUNALES”, se ha efectuado del siguiente modo:
  1. En **3 grupos** de lotes (A, B y C) en función de la territorialidad de los servicios a prestar y con objeto de asegurar que pueda cubrirse la necesidad existente en todo el territorio español, a la vez que se asegura la facilidad de acceso a los recursos necesarios para el correcto cumplimiento del servicio a proporcionar por el procurador. Asimismo, el número de lotes por grupo de lotes asegura que se pueda cubrir con normalidad el volumen de servicios que se estima serán necesarios prestar de forma coetánea en un determinado ámbito geográfico.
  2. En total, hay **9 lotes** por los siguientes motivos:
    - I. Respecto a los Grupos B y C, **Cáceres y Arrecife y Las Palmas de Gran Canaria**, respectivamente. Se ha dividido en dos lotes, para cada uno de los grupos, teniendo en cuenta el volumen de asuntos de posible asignación según los datos de litigiosidad de los años anteriores en sus partidos judiciales y asegurando la disponibilidad de un procurador en el caso de que el otro no pudiera (p.ej. incompatibilidad, baja, jubilación, resolución de uno de los contratos etc.).
    - I. Con respecto al Grupo A, relativo a la **Comunidad de Madrid**, se ha dividido en cinco lotes teniendo en cuenta el volumen de asuntos de posible asignación según los datos de litigiosidad de los años anteriores en sus partidos judiciales y asegurando la disponibilidad de procuradores suficientes en el caso de que el otro/s no pudiera/n (p.ej. incompatibilidad, baja, jubilación, resolución de uno de los contratos etc.).

La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en cuanto a la división en lotes de los contratos, ha invertido la regla general que se utilizaba hasta su promulgación, debiendo justificarse ahora en el expediente la no división del contrato en lotes (art. 116.4g). No obstante, la justificación para la licitación en estos términos, además de los motivos expuestos anteriormente, reside en maximizar la eficiencia y la competitividad del proceso, al tiempo que se facilita la inclusión de diferentes perfiles de procuradores que pueden adaptarse mejor a las necesidades del contrato en términos de especialización y localización, respetando los principios de eficiencia, transparencia y proporcionalidad que rigen la contratación pública.

- ✓ El presupuesto base de licitación, se ajusta tanto a la necesidad real actual como la previsión del trabajo que se generará en los 5 años de duración del contrato calculada la estimación aplicando el histórico de necesidades, la cual refleja una media constante.

### A.3: JUSTIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS

Como se ha expuesto, la personación en juicio de las empresas incluidas en este contrato exige de forma general la obligatoria representación procesal a través de un procurador, y sin que tal función pueda ser asumida o ejercida por ningún empleado del Ente Público, Canal de Isabel II, S.A.M.P., Canal Extensia S.A.U. o Canal Gestión Lanzarote S.A.U.

## B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

El presupuesto base de licitación para la duración total del contrato sin IVA se ha establecido en la cantidad conjunta para todas las empresas del Grupo Canal de **OCHOCIENTOS CUARENTA MIL EUROS (840.000,00.-€)**.

Los honorarios de los Procuradores vienen regulados en el Real Decreto 434/2024, de 30 de abril, por el que se aprueba el Arancel de Derechos de los profesionales de la Procura, y en los que se establece unos aranceles para cada actuación efectuada por los Procuradores en cada procedimiento.

La exposición de motivos de dicho Real Decreto establece que la nueva regulación se fundamenta en la libre negociación para la fijación de precios entre el profesional de la Procura y el cliente, fomentando de esta manera la libre competencia entre los profesionales, con el único límite que comporta no superar los precios máximos en que se transforman los derechos arancelarios que de esta manera se erigen en garantía de los derechos de los clientes, sean o no consumidores y, en particular, de su derecho de acceso a la Justicia y de su derecho de defensa, redundando todo ello en el buen funcionamiento del servicio público de Justicia.

A tal fin, su artículo 1º establece que:

*“Artículo 1. Aprobación del arancel.*

*1. El presente real decreto tiene como objeto la aprobación del arancel de derechos de los profesionales de la Procura cuyo texto se incluye a continuación.*

2. Dicho arancel tendrá carácter de máximo, quedando prohibida la fijación de límites mínimos para las cantidades devengadas en aplicación del arancel en relación con las distintas actuaciones profesionales desarrolladas.

3. El profesional de la Procura y su cliente gozan de libertad para pactar la retribución de los servicios profesionales prestados por el primero en cantidad inferior a lo previsto en el arancel.”

Sentado lo anterior, y sobre la base de la libre negociación que reconoce el Real Decreto 434/2024, y dada su entrada en vigor con fecha 2 de mayo de mayo de 2024, conforme a lo dispuesto en la Disposición transitoria única. Régimen transitorio 1: Las disposiciones previstas en este real decreto se aplicarán a todos los procedimientos que se inicien a partir de su entrada en vigor, y. Disposición final segunda: Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», se ha optado por establecer un cuadro de precios para cada uno de los procedimientos en que sea parte Canal de Isabel II, S.A.M.P., sus empresas participadas, y el Ente Público Canal de Isabel II.

Con el establecimiento de un cuadro de precios:

- Se trata de evitar los problemas de interpretación de los aranceles.
- Se facilita el cálculo de previsión de gasto para cada tipo de procedimiento a través de la inclusión en el precio de los incidentes habituales y posibles del procedimiento (y que el licitador habrá tenido en cuenta al realizar su oferta).
- Se respeta la retribución en relación con el efectivo trabajo, -en tiempo, complejidad y recursos necesarios- de los procuradores en cada procedimiento, con especial atención a las modificaciones legislativas de carácter procesal ya en vigor y las que ya se encuentran aprobadas.

A mayor abundamiento, otra novedad importante es que el trabajo a desarrollar por el procurador ha variado considerablemente como consecuencia de las últimas reformas aprobadas para la digitalización de la justicia, RD Ley 6/2023 de 19 de diciembre, la adaptación de sistemas telemáticos para la tramitación de los procedimientos, la implementación del expediente electrónico, etc. y que, con carácter general, limitarán la asistencia de este tipo de profesionales a las respectivas sedes judiciales.

Para la fijación de los precios asignados a cada uno de los procedimientos, se han tomado en consideración las facturas tramitadas y abonadas en los años 2022 y 2023 por honorarios de Procuradores devengados en la primera instancia de los distintos procedimientos judiciales tramitados y sin incluir el IVA, desglosados por tramos de cuantías y obteniendo la media aritmética de todas ellas para la fijación de un precio fijo dependiendo de la cuantía de procedimiento. En este sentido, es importante resaltar que las facturas abonadas se corresponden con las distintas actuaciones realizadas en cada uno de los procedimientos por lo que son representativos de los honorarios medios percibidos por los Procuradores.



Y todo ello conforme al siguiente detalle:

CUANTÍA	Nº EXPEDIENTES TRAMO	CUANTÍA TOTAL TRAMO	FACTURACION TOTAL TRAMO	FACTURADO POR EXPEDIENTE (PROMEDIO)
Hasta 600 €	44	21.778,81 €	2.265,28 €	51,48 €
De 601 € a 1.000 €	172	135.191,35 €	15.373,75 €	89,38 €
De 1.001 € a 3.000 €	266	445.383,30 €	30.237,71 €	113,67 €
De 3.001 € a 10.000 €	151	849.720,55 €	25.310,00 €	167,61 €
De 10.001 € a 50.000 €	60	1.332.288,77 €	23.159,95 €	385,99 €
De 50.001 € a 100.000 €	8	626.003,84 €	7.540,40 €	942,55 €
Más de 100.000 €	21	11.914.570,25 €	34.351,29 €	1.635,77 €

Estos son los importes reales abonados en los años 2022 y 2023 en concepto de honorarios profesionales devengados por Procuradores de los Tribunales que han asumido la representación procesal de Canal en los procedimientos tramitados en primera instancia, esto es, sin incluir recursos ni demandas de ejecución, y de acuerdo con los derechos arancelarios establecidos en Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.

Dichos importes son el resultado de haber aplicado todos ellos un descuento del 12% sobre los derechos arancelarios devengados de conformidad con la oferta presentada por todos los adjudicatarios del contrato en vigor en los años 2022 y 2023 y que era el máximo autorizado en el actualmente derogado art. 2 del Real Decreto 1373/2003, y a cuyo tenor:

*“Artículo 2. Incremento y disminución del arancel.*

*Los derechos de arancel podrán ser objeto de un incremento o una disminución de hasta 12 puntos porcentuales cuando así lo acuerde expresamente el procurador con su representado para la determinación de los honorarios correspondientes a su actuación profesional.”*

La determinación de los derechos arancelarios concretos a incluir en cada factura depende de las circunstancias individuales de cada procedimiento, aunque de forma recurrente y casi constante se han incluido los siguientes derechos:

- Los derivados de la Escala Tabla general del Art. 1
- Abono de Cuota Variable
- Autorización y obtención de copias
- Adelanto y pago de tasa judicial
- Reintegro de gastos suplidos.
- Tasación de costas, liquidación de intereses y demás incidencias
- Desistimientos, allanamientos, etc.

Sentado lo anterior, y con objeto de facilitar la gestión de este tipo de facturas, es por lo que se ha optado por establecer un cuadro de precios acorde con los derechos arancelarios efectivamente facturados y percibidos por los Procuradores, y sin menoscabo de sus ingresos ordinarios, de acuerdo con el Real Decreto 1373/2003 y el Real Decreto 434/2024, siendo de destacar que los precios abonados en los años 2022 y 2023 se han incrementado en un 25% para compensar la reducción del 12 % aplicada por todos ellos, así como posibles incidentes de carácter extraordinario que pudieran producirse.

CUANTÍA DEL PROCEDIMIENTO	PRECIO
Hasta 600 €	65 €
De 601 a 1000 €	110 €
De 1.001 a 3.000 €	140 €
De 3001 a 10.000 €	210 €
De 10.001 a 50.000 €	485 €
De 50.001 a 100.000 €	1180 €
Más de 100.000 €	2.045 €
Cuantía indeterminada	350 €

El cuadro de precios establecido en el contrato se fija como base de cálculo para el procedimiento en primera instancia, y remunera todas las actuaciones de averiguación del domicilio del demandado, todo tipo de incidentes, recursos, actuaciones y demás conceptos ordinarios que se puedan producir en el procedimiento hasta su terminación en instancia.

A efectos enunciativos y no limitativos se incluyen las siguientes actuaciones y conceptos incluidos para cada una de las instancias: intervención en tasaciones de costas o liquidación de intereses; incidencias tales como remoción de depósito, presentación de documentos fuera del término de prueba, alzamientos y cancelación de embargos, determinación de cuantía, cesión de remate, subrogación de derechos y desistimiento así como solicitud de medidas que tiendan a asegurar el resultado del procedimiento, como actuaciones anticipadas de prueba, anotaciones preventivas de embargo en cualquier registro público y sus prorrogas, oposición al embargo por tercero, retención de sueldos, saldos, ampliaciones de embargos y demandas, embargos en rebeldía y actuaciones de investigación patrimonial o domiciliaria; consignaciones y depósitos para recurrir por el ejercicio de la potestad jurisdiccional (consignación, constitución y retirada de avales, depósitos y mandamientos judiciales de pago o de devolución, efectos públicos, acciones o valores); copias en soporte papel; Desglose de documentos, solicitud de testimonios y certificaciones (solicitud de desglose de documentos, de exhibición de autos, de expedición de testimonios y certificaciones u obtención de copia por cualquier otro medio de reproducción admitido por la ley); Cuestiones de competencia, incidentes de acumulación, recusación, nulidad y reconstrucción de autos (cuestión de competencia, incidente de acumulación de procesos, recusación, incidentes de nulidad de actuaciones y reconstrucción de autos); Vía de apremio; medidas cautelares; Recursos de reposición; Recursos de revisión; Peticiones de aclaración, subsanación y complemento; Recursos de queja y; Recursos de reforma y súplica.

No obstante, y dada su singularidad, se aplicará un precio fijo, con independencia de la cuantía del procedimiento, atendiendo a sus generales y específicas características o carga de trabajo en los siguientes procedimientos:

PROCEDIMIENTO	PRECIO
Monitorio.	45 €
Actos de conciliación.	25 €
Medidas Provisionales y/o Preliminares o cautelares provisionales o definitivas.	45 €
Juicios rápidos y juicios por Delitos leves incluyendo en su caso, las Diligencias Previas por el que se haya abierto.	55 €
Diligencias Previas transformadas en Procedimiento Abreviado u Ordinario.	150 €
Ejecutorias Penales.	45 €

#### Determinación de la cuantía:

El cuadro de precios anteriormente citado se aplicará tomando en consideración la cuantía o tipo del procedimiento, según corresponda, con independencia del orden jurisdiccional al que se refiera.

La cuantía de la primera instancia será la resultante de la suma de la cuantía reclamada en la demanda y, en su caso, la cuantía de la reconvencción y/o de la demanda que se acumule, sin que afecte el número de acciones que se ejerciten en el procedimiento.

La cuantía de un recurso de apelación será la cuantía discutida en el mismo y, la cuantía de la ejecución de Sentencia será por la que se despache ejecución (principal + 30%).

Además, los honorarios a percibir se reducirán a un 25% del precio ofertado por el licitador, en los siguientes casos:

1. Comparecer/personarse a los solos efectos de allanarse a la demanda, realizar consignación de cantidades u obtener autos y comunicar el no ejercicio de acciones, solicitar el sobreseimiento o solicitar que las acciones las ejercite el fiscal.
2. Demanda inadmitida.
3. Denuncia/querella inadmitido o archivado sin la práctica de diligencia alguna en la que haya debido intervenir.
4. Recurso inadmitido a trámite, declarado desierto o no formalizado.
5. Recepción y traslado de notificaciones en incidente, pieza separada, ejecución o recurso sin estar personados en éstos, pero se notifica por ser parte en el procedimiento.
6. Comparecer como acreedor posterior.
7. Finalización del procedimiento por desistimiento, renuncia, transacción, carencia sobrevenida de objeto (ej. Satisfacción extraprocesal, estimación en vía administrativa de acto expreso o presunto objeto del procedimiento...) antes de la celebración de vista o juicio.
8. Pago íntegro en el plazo voluntario de pago otorgado en el despacho de ejecución.
9. Procedimientos que, teniendo en su regulación la realización de acto de juicio o vista (interdicto, Verbal, Ordinario, Abreviado...) finalice el procedimiento sin su celebración.

Por tales motivos, se facturarán de forma separada e independiente las distintas instancias, los incidentes de ejecución de sentencia y tomando en consideración igualmente el momento procesal y la manera en que se produce la resolución del procedimiento judicial, en aras a garantizar que se remunera el trabajo efectivo realizado por el Procurador.

En relación con el presupuesto base de licitación (PBL) o dicho de otro modo, el límite de gasto de este contrato:

No es posible determinar a priori en cuantos procedimientos judiciales se verán inmersos las distintas empresas para las que se solicite la prestación del servicio de Procuraduría, las cuantías que serán objeto de reclamación, ni el plazo máximo en que se resolverán los distintos procedimientos judiciales en que sean parte, y no solo por depender de las acciones formuladas en cada uno de los procedimientos judiciales incoados, sino igualmente por la demora que arrastra la Administración de Justicia en no pocas ocasiones. Esta incertidumbre recomienda la licitación del contrato por un periodo de 5 años con objeto de garantizar la continuidad del servicio, sobre todo a la vista de los resultados obtenidos en el contrato 108/2019 actualmente en vigor, y que ponen de manifiesto la necesidad de licitar el presente contrato.

Actualmente el contrato que da cobertura a la mayor parte de los servicios de representación procesal en juicio de Canal de Isabel II, S.A.M.P., es el contrato 108/19, de “Servicios de Procuraduría”, licitado con fecha por un total 14 Lotes, y finalmente adjudicado a un total de seis procuradores, tras haber quedado desiertos los Lotes 10 a 14.

Pese a que dicho contrato fue licitado por un periodo de cuatro años, ya ha visto comprometido todo el presupuesto asignado ante el desconocimiento que se tiene de las incidencias procesales que pueden surgir en los procedimientos tramitados (posibles recursos, incidentes de ejecución, etc.) y que determinaban conforme a la anterior regulación del Real Decreto 1373/2003, la inclusión de nuevos y sucesivos derechos arancelarios de imposible previsión pero obligatorios en cualquier caso.

En este sentido, debe tenerse en cuenta la heterogeneidad de la actividad desarrollada por Canal de Isabel II, S.A.M.P., las instalaciones y miles de kilómetros de red que gestiona, las múltiples implicaciones de ámbito administrativo que genera la prestación del servicio del ciclo integral del agua y el más de millón y medio de clientes que gestiona para comprender la variedad y multitud de reclamaciones judiciales en que puede ser parte y que de forma constante y continuada se han venido produciendo en los últimos años.

Aunque no es posible determinar en cuantos procedimientos será parte las empresas del Grupo Canal, ni qué incidencias o alcance se pueden producir durante la tramitación de dichos procedimientos, analizando los datos relativos a los dos últimos ejercicios revelan que el 86,53 % de los mismos se corresponden con expedientes de reclamación de deuda a tramitar ante el orden civil, y el resto a otro tipo de materias y jurisdicciones.

Por tal motivo, se ha hecho una previsión sobre los posibles costes asociados a un total de 3.020 expedientes de reclamación de deuda que se pretende judicializar en los próximos años por Canal de Isabel II, S.A. M.P., de acuerdo con el cuadro de precios establecido en el presente contrato, y con el siguiente resultado:

PREVISIÓN ARANCELES PROCURADORES			
IMPORTE PRINCIPAL	ARANCEL	Nº EXPTEs	CUANTÍA
Hasta 600 €	65 €	846	54.990,00 €
De 601 a 1000 €	110 €	959	105.490,00 €
De 1.001 a 3.000 €	140 €	870	121.800,00 €

De 3001 a 10.000 €	210 €	317	66.570,00 €
De 10.001 a 50.000 €	485 €	26	12.610,00 €
De 50.001 a 100.000 €	1.180 €	1	1.180,00 €
Más de 100.000 €	2.045 €	1	2.045,00 €
TOTAL		3020	364.685,00 €

Nótese, que la cantidad de 364.685.-€ establecidos, se corresponden exclusivamente con los costes de procuraduría devengada en la primera instancia por todos los conceptos, no así los costes asociados a posibles recursos de apelación, ni a las demandas de ejecución, por desconocerse si finalmente será necesario agotar dichos trámites para la ejecución final de la sentencia y que, sin duda, incrementarán los honorarios finales a satisfacer a los Procuradores.

De igual manera, estos expedientes deben ser completados, además, con los nuevos procedimientos que se van a recibir para reclamación judicial de la deuda, y con los expedientes de distinta naturaleza en que es parte Canal y en los que resulta necesario contar con la representación procesal de un Procurador de los Tribunales, y que pueden afectar a reclamaciones de cantidad formuladas a instancias o contra Canal, (reclamaciones de daños y perjuicios, reclamaciones de contratistas, etc.), denuncias tramitadas ante la jurisdicción penal, recursos tramitados ante el orden contencioso administrativo, etc.

En cualquier caso, y tomando por referencia los 1.388 procedimientos judiciales tramitados en los dos últimos años en los que ha ostentado la representación procesal de Canal de Isabel II, S.A.M.P. un Procurador, obtenemos los siguientes resultados:

Procedimientos desglosados por Jurisdicciones:

Nº TOTAL EXPEDIENTES	1.388	% SOBRE EL TOTAL
J. CIVIL	1.273	91,71 %
J. PENAL	69	4,97 %
J. CONTENCIOSO ADMINISTRATVA	44	3,17 %
J. LABORAL	2	0,14 %

Procedimientos desglosados por cuantías:

Nº TOTAL EXPEDIENTES	1.388	% SOBRE EL TOTAL
MENOS DE 500 €	31	2,23 %
DE 501 A 2.500 €	935	67,36 %
DE 2.501 A 10.000 €	282	20,31 %
DE 10.001 A 16.000 €	46	3,31 %

DE 16.001 A 50.000 €	37	2,66 %
DE 50.001 A 100.000 €	1	0,072
MÁS DE 100.001 €	12	0,86 %
INDETERMINADA	44	3,17 %

Con tales precedentes, y dada la litigiosidad que se va a seguir produciendo en los próximos años, se prevé la necesidad de contar con un servicio de Procuraduría para asumir la representación procesal de las empresas del grupo Canal de Isabel II en los procedimientos judiciales que se vayan incoando a instancias y en contra de éstas y que, a priori, se entiende mantendrán la misma carencia que en años anteriores.

Para el cálculo del presupuesto base de licitación indicado en el apartado 3. A del presente documento, Canal de Isabel II, Ente Público ha analizado los expedientes de responsabilidad patrimonial en tramitación cuya cuantía supera los 30.000 euros, ya que los de cuantía inferior, en caso de impugnación en vía judicial, se tramitan por el procedimiento abreviado ante un órgano unipersonal, por lo que los abogados del Área Jurídica del Ente Público asumen su propia defensa y representación de conformidad con el artículo 23.1 de la LRJCA. Por tanto, la intervención de los Procuradores de los Tribunales es necesaria, principalmente, en aquellos procedimientos que superen dicha cuantía y que se tramitan ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia que, al ser un órgano colegiado, el apartado 2 del precitado artículo 23 establece la comparecencia en forma por medio de Procurador. Por ello, se ha advertido que, tomando en consideración los últimos dos años, se encuentran en tramitación 18 procedimientos que serían susceptibles de impugnación ante el TSJ por razón de su cuantía –por tanto, 9 procedimientos de media al año– con importes que varían desde los 30.247,57 euros hasta los 874.796,39 euros, motivo por lo cual, estimando que la presente licitación además de evitar la licitación de diversos contratos menores, con la demora que ello conlleva, a efectos de la brevedad de los plazos procesales, permite tener prevista la posibilidad de la intervención de procurador, caso de necesitarse y con independencia de prestarse efectivamente el servicio contratado, tener cubierta dicha contingencia al menos hasta la fecha de la duración del presente contrato.

## **5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN**

### **A. AUTORIZACIÓN A CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.**

Procedimiento abierto no armonizado con pluralidad de criterios. Ente Público Canal de Isabel II autoriza a Canal de Isabel II S.A., M.P. a contratar los servicios de procuraduría de los tribunales a las sociedades del Grupo Canal de Isabel II, en representación de la primera, que resulten del procedimiento abierto no armonizado con pluralidad de criterios promovido por Canal de Isabel II, S.A., M.P.

**B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN**

- ☒ **ABIERTO** (en cualquiera de sus modalidades: ordinario, simplificado...)  
☐ **NEGOCIADO**  
☐ **CONTRATACIÓN BASADA EN ACUERDO MARCO (AM)**  
☐ **CONTRATACIÓN ESPECÍFICA DERIVADA DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN (SDA)**



Firmado digitalmente por:  
ANGEL ILLERA GIL (R: Q2817017C)  
C= ES O = CANAL DE ISABEL II  
COMUNIDAD DE MADRID

**Ángel Illera Gil**  
**Jefe del Área de Servicios Administrativos**



2025.03.06 15:44:18  
+01'00'

**Manrique Mariscal de Gante Martínez**  
**Jefe de Área Jurídica**

Firmado por José Luis Fernández-Quejo del Pozo el día 07/03/2025 con un certificado emitido por AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016

**José Luis Fernández-Quejo del Pozo**  
**Director Gerente**